**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 24/2004**

SERVIDOR PÚBLICO:

**México, Distrito Federal a veintisiete de junio de
dos mil cinco.**

Vistos para emitir resolución definitiva en el
procedimiento de responsabilidad administrativa
24/2004, y;

R E S U L T A N D O:

PRIMERO. Mediante oficio
C/CRARP/DRP/1557/2004 de cinco de octubre de
dos mil cuatro, recibido el mismo día en la entonces
Contraloría de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, el Director de Registro Patrimonial hizo del
conocimiento de la Directora de Responsabilidades
de la citada Contraloría la presunta infracción en la
que incurrió el servidor público *********, a lo
dispuesto en el artículo 37, fracción II, de la Ley
Federal de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos, así como el punto único del
Acuerdo General de Administración II/1999 del ocho
de febrero de mil novecientos noventa y nueve al
haber presentado extemporáneamente la declaración
de conclusión de encargo como secretario auxiliar del

secretario particular, adscrito a la ponencia del señor Ministro José Vicente Aguinaco Alemán.

SEGUNDO. Por proveído de once de octubre de dos mil cuatro se determinó iniciar cuaderno de investigación sobre la queja formulada en contra del servidor público *****, a efecto de determinar si el servidor público de referencia se encontraba obligado a presentar su declaración de conclusión del encargo, por lo que se ordenó girar oficio al Director de Registro Patrimonial para que en el plazo de tres días hábiles informara a la Dirección de Responsabilidades Administrativas a qué área fue adscrito el servidor público en cita, con qué categoría y a partir de qué fecha, toda vez que de la copia certificada de la baja se advirtió que el motivo de su separación del encargo fue por cambio de adscripción.

TERCERO. Mediante acuerdo del tres de noviembre de dos mil cuatro, se tuvo por cumplido el requerimiento formulado en auto de once de octubre de dos mil cuatro y se ordenó requerir a la entonces Dirección General de Desarrollo Humano para que remitiera copias certificadas de los nombramientos expedidos a nombre de ***** correspondientes al nueve de marzo de dos mil cuatro cuyo cargo fue de chofer de Ministro por tiempo indefinido y el de dieciséis de abril del mismo año, con el cargo de ayudante de servicios SPS.

CUARTO. Una vez satisfecho el requerimiento que antecede, el diecinueve de noviembre de dos mil cuatro, el entonces Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió la queja formulada en contra de *********, en virtud de que al parecer no cumplió con la obligación de presentar en tiempo la declaración de conclusión de encargo; ordenó registrar el cuaderno de investigación correspondiente con el número de procedimiento de responsabilidad administrativa **24/2004**; y, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 134, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, requirió a ********* para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la notificación de cuenta, formulara un informe escrito sobre todos y cada uno de los hechos que se le imputaron y ofreciera las probanzas que en su defensa tuviera.

QUINTO. El trece de abril de dos mil cinco la Secretaría Ejecutiva de la Contraloría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió dictamen con los puntos resolutivos siguientes:

“PRIMERO.- ** es responsable de la infracción administrativa materia de este***

procedimiento, conforme lo expuesto en el sexto considerando de este dictamen.

SEGUNDO.- Se propone sancionar a ** con una amonestación privada, de acuerdo con lo señalado en el último considerando del presente.***

Las consideraciones en que se sustenta dicha propuesta de resolución, en síntesis, son las siguientes:

I. La infracción atribuida a ***** consiste en haber presentado en forma extemporánea la declaración de conclusión de encargo dentro del plazo que se establece en el artículo 37, fracción II, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, lo que se desprende de la copia certificada del acuse de recibo de dicha declaración de veintiocho de mayo de dos mil cuatro, expedida por el Director de Registro Patrimonial.

II. ***** es responsable administrativamente de la falta atribuida, consistente en haber presentado extemporáneamente su declaración de conclusión de encargo, es decir, fuera de los sesenta días naturales siguientes al en que causó baja por cambio de adscripción, toda vez que de acuerdo con lo

establecido en el punto de acuerdo ÚNICO del Acuerdo General de Administración 11/1999 de la Presidencia de este Alto Tribunal de ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, los servidores públicos que ocupen una plaza de secretarios auxiliares de secretario particular tienen obligación de presentar declaraciones de situación patrimonial y de los antecedentes que obran en el expediente se advierte lo siguiente:

1. El veintinueve de junio de dos mil uno, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, expidió nombramiento a *****, como secretario auxiliar del secretario particular, adscrito a la ponencia del señor Ministro José Vicente Aguinaco Alemán, con efectos a partir del primero de julio de dos mil uno.
2. El doce de marzo de dos mil cuatro se expidió aviso de baja por cambio de adscripción, con efectos a partir del ocho de marzo de dos mil cuatro, ocupando a partir de la referida fecha, un nombramiento diverso al que ocupaba como secretario auxiliar del secretario particular.
3. De la copia certificada del acuse de recibo de la declaración de conclusión de encargo presentada por ***** de fecha veintiocho de mayo de dos mil cuatro, se advierte que se presentó de manera

extemporánea, es decir, que fue presentada fuera del plazo de sesenta días que prevé la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos para cumplir con dicha obligación, si se considera que el plazo comenzó a correr al día siguiente de la baja, esto es el nueve de marzo de dos mil cuatro y que la declaración de conclusión de encargo debía presentarse a más tardar el siete de mayo de ese mismo año.

4. Por tanto, ***** es responsable de la infracción administrativa que se le atribuye al no haber presentado con oportunidad su declaración de conclusión de encargo, como se ordena en el artículo 8, fracción XV, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos ya que debió haberla presentado a más tardar el siete de mayo de dos mil cuatro y el servidor público presentó su declaración de conclusión de encargo hasta el veintiocho de mayo del mismo año, esto es, fuera del plazo de sesenta días naturales que se prevé en el artículo 37, fracción II, de la mencionada ley, de ahí que sea evidente que incurrió en la infracción a que se alude en el artículo 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por incumplir lo dispuesto en el primero de los preceptos citados de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

En el dictamen se estableció que no son obstáculo para arribar a la conclusión anterior, las defensas esgrimidas a su favor por ***** en el informe rendido en el procedimiento pues no desvirtúa la infracción administrativa que se le imputa, ni acredita la existencia de una causa que justifique el incumplimiento de sus obligaciones puesto que, sólo refiere que no fue informado de que debía presentar tal declaración, y a que desconocía tal obligación; además de que no sustentó con prueba fehaciente alguna que estuviera imposibilitado para cumplir con la obligación de presentar su declaración de situación patrimonial.

III. Al haber encontrado responsable administrativamente a ***** de la falta atribuida, en el dictamen se propone sancionarlo con una amonestación privada, toda vez que la conducta en la que incurrió no está calificada como grave, además de que, en términos generales, se observó que era la primera vez que en el órgano interno de control de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se instruía un procedimiento disciplinario en su contra; que dicha infracción no le generó beneficio o lucro, ni provocó daño o perjuicio en el patrimonio de este Alto Tribunal, al tratarse de la extemporaneidad en la presentación de la declaración de conclusión de encargo.

SEXTO. El referido dictamen se notificó al servidor público el veinte de abril de dos mil cinco, fecha en la que el Secretario Ejecutivo de la Contraloría de este Alto Tribunal acordó remitir a esta Secretaría Ejecutiva de Asuntos Jurídicos el expediente de responsabilidad administrativa **24/2004.**

El veinticuatro de junio de dos mil cinco, sin que el servidor público ejerciera sus defensas, la Secretaría Ejecutiva de Asuntos Jurídicos de este Alto Tribunal emitió opinión en el sentido de que el referido servidor público es responsable administrativamente de la falta materia de este procedimiento de responsabilidad administrativa, por lo que se debe imponer el apercibimiento privado que en esa opinión se propone.

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver en definitiva el presente procedimiento de responsabilidad administrativa seguido en contra de ***** con fundamento en lo dispuesto en los artículos 133, fracción II, en relación con el 14, fracción XXI, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues se trata de un servidor

público de este Alto Tribunal al que se le atribuye una conducta infractora que no está catalogada como grave.

SEGUNDO. Antes de abordar el estudio del referido dictamen y del procedimiento que le precedió, resulta conveniente precisar que tal y como se determinó al emitir la resolución correspondiente al procedimiento de responsabilidad administrativa 17/2003, ante la falta de regulación expresa, bien sea en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación o en las disposiciones de observancia general que al efecto emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe aplicarse directamente lo dispuesto en el marco legal que constituye el sistema general de responsabilidades y que se encuentra establecido en la respectiva ley federal, es decir, debe atenderse a lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, por lo que si en el artículo 47 de este ordenamiento se establece que en todas las cuestiones relativas al procedimiento no previstas en esa ley, así como en la apreciación de las pruebas, se observarán las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, debe concluirse que ante los vacíos legislativos que presente la regulación creada específicamente para esta Suprema Corte y la citada Ley de Responsabilidades, el ordenamiento de

aplicación supletoria será precisamente el Código Federal de Procedimientos Civiles.

TERCERO. Por principio, cabe señalar que del análisis del expediente relativo al procedimiento de responsabilidad administrativa **24/2004**, se advierte que se siguieron las respectivas formalidades del procedimiento, en tanto que, con motivo del seguimiento de la evolución de situación patrimonial de los servidores públicos: **1.** El Director de Registro Patrimonial informó que ***** incurrió en la infracción consistente en no haber presentado con oportunidad su declaración de conclusión de encargo; es decir, denunció ante el órgano competente de la Contraloría la comisión de una falta administrativa con lo que se dio inicio al procedimiento. **2.** El Secretario Ejecutivo de la Contraloría de este Alto Tribunal acordó lo conducente y registró el expediente relativo al procedimiento sobre la probable infracción y otorgó un plazo de cinco días hábiles para que ***** rindiera su informe respecto de la falta de oportunidad en la presentación de la declaración de conclusión de encargo y ofreciera las pruebas relacionadas con su defensa. **3.** El servidor público rindió el informe solicitado sin ofrecer pruebas en su defensa. **4.** El Secretario Ejecutivo de la Contraloría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el dictamen correspondiente y lo remitió a la Secretaría Ejecutiva de Asuntos Jurídicos. **5.** Se otorgó un plazo para que

***** manifestara lo que a su derecho conviniera en términos de lo previsto en el artículo tercero, fracción XIV, párrafos segundo, tercero y cuarto, del Acuerdo General de Administración II/2003, sin que dicho servidor público ejerciera esa prerrogativa.

CUARTO. El presente procedimiento de responsabilidad administrativa se inició con la denuncia presentada por el Director de Registro Patrimonial en contra de ***** y, una vez desarrollado dicho procedimiento, la Secretaría Ejecutiva de la Contraloría de este Alto Tribunal estimó que dicho servidor público es responsable de la infracción administrativa prevista en el artículo 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por incumplimiento a la obligación señalada en el artículo 8, fracción XV, en relación con lo dispuesto en el diverso 37, fracción II, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y en el punto de acuerdo ÚNICO del Acuerdo General de Administración 11/1999 de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

De tal manera que, para estar en aptitud legal de emitir una opinión sobre si ***** omitió cumplir alguna de sus obligaciones relacionadas con el registro patrimonial, es imprescindible tener presente

el contenido de los preceptos que se estimaron violados en la referida denuncia.

Así, conviene precisar que los artículos 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, 8, fracción XV; 37, fracción II y Noveno Transitorio de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, son del tenor siguiente:

“ARTÍCULO 131. Serán causas de responsabilidad para los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación:

...XI. Las previstas en el artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, siempre que no fueren contrarias a la naturaleza de la función jurisdiccional...”

“ARTÍCULO 8. Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones:

...XV. Presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial, en los términos establecidos por la ley...”

“ARTÍCULO 37. La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los siguientes plazos:

...II. Declaración de conclusión del encargo, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la conclusión...”

“Artículo Noveno Transitorio.- Las menciones que en otras leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas o administrativas de carácter federal se hagan de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos o en particular de alguno de sus preceptos, se entenderán referidas a esta Ley o a los artículos de este ordenamiento legal cuyo contenido coincida con los de la Ley que se deroga, con la salvedad que se establece en el transitorio segundo de esta Ley.”

Asimismo, el punto ÚNICO del Acuerdo General de Administración 11/1999 de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señala:

“ÚNICO.- Además de los señalados en los acuerdos plenarios 6/1999 de fecha cinco de diciembre de mil novecientos noventa y seis

y 3/98 de la presidencia de este Alto Tribunal, de fecha 12 de febrero de 1998, quedan obligados a presentar declaraciones sobre situación patrimonial en los términos del acuerdo citado en primer término y demás disposiciones aplicables, los siguientes servidores públicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

- Secretario Auxiliar del Secretario Particular.”

De lo dispuesto en los artículos que anteceden se desprende la obligación a cargo de los servidores públicos de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que tengan el nombramiento de secretario auxiliar del secretario particular, de presentar declaración patrimonial de conclusión de encargo dentro de los plazos señalados por la ley.

En el caso de ***** se le atribuye como infracción administrativa el haber presentado la declaración de conclusión de encargo de manera extemporánea, con motivo de su baja por cambio de adscripción como secretario auxiliar del secretario particular adscrito a la ponencia del señor Ministro José Vicente Aguinaco Alemán, por lo que es menester analizar si su conducta se ajusta al respectivo supuesto de responsabilidad

administrativa y si, derivado de ello, ha lugar a imponerle alguna sanción o en su defecto, existen causas que justifiquen su actuación y deba relevársele de aquélla.

De las copias certificadas tanto del nombramiento de *****, como del acuse de recibo de la declaración de conclusión de encargo, documentos que corren agregados al expediente de responsabilidad administrativa, se advierte que el veintinueve de junio de dos mil uno, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación expidió nombramiento a ***** como secretario auxiliar del secretario particular, adscrito a la ponencia del señor Ministro José Vicente Aguinaco Alemán, con efectos a partir del primero de julio de dos mil uno; y, que el ocho de marzo de dos mil cuatro se dio el aviso de baja por cambio de adscripción, posteriormente hasta el veintiocho de mayo de dos mil cuatro, se recibió extemporáneamente la declaración de conclusión de encargo presentada por el servidor público mencionado.

De los señalados elementos de convicción, los cuales tienen valor probatorio pleno en términos de lo que establecen los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a este procedimiento se arriba al convencimiento de que:

- ***** ejerció el cargo de secretario auxiliar del secretario particular, adscrito a la ponencia del señor Ministro José Vicente Aguinaco Alemán, nombramiento respecto del cual, los servidores públicos que lo ejerzan se encuentran obligados a presentar declaración de situación patrimonial, en términos de lo que se prevé en el punto de acuerdo ÚNICO del Acuerdo General de Administración 11/1999 de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

- El plazo de sesenta días naturales para la presentación de la declaración patrimonial de conclusión de encargo a que alude la fracción II del artículo 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, comenzó a correr a partir del día siguiente a la baja de su nombramiento por cambio de adscripción, esto es a partir del nueve de marzo de dos mil cuatro, y, por tanto, dicha declaración debía presentarse a más tardar el siete de mayo del mismo año.

- ***** presentó su declaración de conclusión de encargo el veintiocho de mayo de dos mil cuatro, esto es, después del siete de mayo del mismo año, fecha en la que concluía el plazo para su presentación.

- La declaración de conclusión de encargo de ***** fue presentada extemporáneamente, por lo que se ubicó en la hipótesis de responsabilidad administrativa prevista en la fracción XI del artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación al no haber cumplido con la obligación que le impone el artículo 8, fracción XV, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, consistente en presentar con oportunidad las declaraciones de situación patrimonial.

De tal suerte, se pone de manifiesto que dicho servidor público se abstuvo de presentar la declaración respectiva dentro del plazo de sesenta días naturales siguientes al en que ocupó el cargo de secretario auxiliar del secretario particular adscrito a la ponencia del señor Ministro José Vicente Aguinaco Alemán, por lo que al existir la obligación de presentar una declaración patrimonial de esa naturaleza para los servidores públicos de su categoría y funciones y, no haberlo hecho así, es evidente que incurrió en la falta administrativa que se le atribuyó.

En tal virtud, se considera que ***** se ubicó en el supuesto de responsabilidad administrativa previsto en el artículo 131, fracción XI, de la Ley

Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por incumplimiento a la obligación señalada en el artículo 8, fracción XV, en relación con lo dispuesto en el artículo 37, fracción II, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y en el punto ÚNICO del Acuerdo General Administración 11/1999 de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En consecuencia, al existir la infracción administrativa que se atribuyó a *****, es menester analizar si dicha circunstancia trae aparejada la imposición de una sanción en su contra o, si por el contrario, existen causas que la justifiquen y, por ende, deba relevársele de aquélla.

Lo anterior es así, porque sin desconocer de manera alguna la trascendencia que reviste el cumplimiento de las obligaciones que les asisten a los servidores públicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para concluir si una falta administrativa debe ser sancionada es indispensable tomar en cuenta las circunstancias que rodearon su comisión tal como lo reconoce el legislador en el artículo 37, párrafo décimo segundo, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, conforme al cual, tratándose de la extemporaneidad en la presentación de declaración patrimonial de conclusión de encargo, es menester

analizar si la falta respectiva encuentra alguna causa de justificación.

En el citado párrafo décimo segundo del artículo 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos se dispone:

“Artículo 37...Para el caso de omisión, sin causa justificada, en la presentación de la declaración a que se refiere la fracción II, se inhabilitará al infractor por un año...”

De lo dispuesto en este numeral, aun cuando el supuesto que prevé se refiere a la omisión de la presentación de la declaración de conclusión de encargo y no de su presentación extemporánea, se estima que, si ante aquella omisión, la legislación prevé que es factible analizar la existencia de alguna causa justificada, por mayoría de razón, ante una presentación fuera del plazo previsto para esos efectos, debe estudiarse la existencia o no de una causa de esa naturaleza.

En ese orden de ideas, atendiendo a la voluntad del legislador en cuanto a valorar la posible justificación de una falta administrativa relacionada con la presentación de la declaración patrimonial, debe evitarse actuar con un rigorismo a ultranza

imponiendo fatalmente sanciones cuando se constate una extemporaneidad en el cumplimiento de una obligación de esa naturaleza, sin que previamente se analicen las características particulares que reviste el caso concreto, pues un prurito de esa índole equivaldría a soslayar el incontrovertible hecho de que pudieran existir situaciones excepcionales que justifiquen la conducta respectiva.

Con base en lo anterior, se impone analizar lo que *****, al rendir el informe que le fuera solicitado con motivo del presente procedimiento de responsabilidad administrativa, expresó en su defensa ante la entonces Contraloría de este Alto Tribunal, argumentos que en síntesis consisten en que: no fue informado de que debía presentar tal declaración y desconocía tal obligación.

Del análisis de los argumentos aducidos, se considera que son insuficientes para relevar a ***** de la responsabilidad en la que incurrió.

Además, de las constancias que corren agregadas en el expediente del procedimiento de responsabilidad administrativa no se desprende que el citado servidor público se hubiera encontrado imposibilitado para presentar en tiempo su declaración patrimonial de conclusión de encargo.

En ese orden de ideas, las defensas enderezadas no constituyen elementos suficientes para relevar a ***** de la responsabilidad administrativa por la falta en que incurrió al no haberse ajustado al marco legal que lo obligaba a rendir con la debida oportunidad su declaración de conclusión de encargo, toda vez que las mismas no revelan alguna causa justificada que lo haya imposibilitado para cumplir con su obligación.

Por tanto, al no existir dentro de las constancias que integran el expediente algún elemento que permita relevar de responsabilidad a ***** por incumplimiento de la obligación legal que tenía de presentar su declaración patrimonial de conclusión de encargo en el lapso de sesenta días señalado para el efecto, su inobservancia necesariamente constituye una infracción de carácter administrativo, por lo que debe declararse fundada la denuncia que dio lugar al procedimiento de responsabilidad administrativa instruido en su contra.

QUINTO. En virtud de que se acreditó que ***** se ubicó en la hipótesis de responsabilidad administrativa, debe determinarse la sanción que se le ha de imponer tomando en cuenta el artículo 45, fracción I, del Acuerdo 9/2005 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de fecha veintiocho de marzo de dos mil cinco, pues aun

cuando los hechos que constituyen la hipótesis de responsabilidad analizada se realizaron con anterioridad a la entrada en vigor de dicho Acuerdo, lo cierto es que su aplicación retroactiva se justifica en virtud de que con ella se beneficia a *****, pues en la mencionada fracción I, se establece una sanción menor a las previstas en la ley de la materia.

El anterior criterio se robustece con la tesis de jurisprudencia, cuyo rubro, texto y datos de identificación son los siguientes:

“MULTAS FISCALES. DEBEN APLICARSE EN FORMA RETROACTIVA LAS NORMAS QUE RESULTEN BENÉFICAS AL PARTICULAR. Si la imposición de las sanciones (penales o fiscales) tiene como finalidad mantener el orden público a través del castigo que, en mayor o menor grado, impone el Estado al que incurre en una infracción, debe considerarse que las multas fiscales tienen una naturaleza similar a las sanciones penales y, por tanto, la aplicación en forma retroactiva de las normas que beneficien al particular, se apegan a lo dispuesto por el artículo 14 constitucional y al principio de retroactividad en materia penal aceptado por la jurisprudencia, la ley y la doctrina, en tanto que, por tratarse de castigos que el Estado impone, debe procurarse la mayor equidad en su

imposición, en atención a lo dispuesto por el artículo 1o. de la Carta Magna”.

(Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.Tomo: VII, Marzo de 1998. Tesis: 2a./J. 8/98. Página: 333).

Así, para fijar la sanción correspondiente es necesario atender a lo previsto en el artículo 14 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en relación con el 136 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como a la fracción I del artículo 45 del citado Acuerdo 9/2005.

El artículo 136 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, señala:

“Artículo 136. Las faltas serán valoradas y, en su caso sancionadas, de conformidad con los criterios establecidos en los tres últimos párrafos del artículo 53 y los artículos 54 y 55 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

“En todo caso, se considerarán como faltas graves, el incumplimiento de las obligaciones señaladas en las fracciones XI a XIII, y XV a XVII del artículo 47 de la Ley Federal de

Responsabilidades de los Servidores Públicos, en las fracciones I a VI del artículo 131 de esta ley, y las señaladas en el artículo 101 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”(...).

El artículo 14 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a la letra dice:

“Artículo 14. Para la imposición de las sanciones administrativas se tomarán en cuenta los elementos propios del empleo, cargo o comisión que desempeñaba el servidor público cuando incurrió en la falta, que a continuación se refieren:

“I. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta ley o las que se dicten con base en ella;

II. Las circunstancias socioeconómicas del servidor público;

III. El nivel jerárquico y los antecedentes del infractor; entre ellos la antigüedad en el servicio;

IV. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución;

V. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y

VI. El monto del beneficio, lucro, o daño derivado del incumplimiento de obligaciones.

Para los efectos de la Ley, se considerará reincidente al servidor público que habiendo sido declarado responsable del incumplimiento a alguna de las obligaciones a que se refiere el artículo 8 de la Ley, incurra nuevamente en una o varias conductas infractoras a dicho precepto legal.”

El artículo 45 del Acuerdo 9/2005, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es del tenor siguiente:

“Artículo 45. Las sanciones aplicables a los servidores públicos que incumplan las obligaciones previstas en el artículo 2º de este acuerdo, consistirán en:

I. *Apercibimiento privado o público;*
(...)”.

Así, a continuación se lleva a cabo la individualización de la sanción correspondiente, con

base en las fracciones I a VI del transcrito artículo 14 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

I. Por lo que hace al primero de los aspectos referidos, es pertinente destacar que la falta cometida por ***** prevista en el artículo 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por incumplimiento a la obligación señalada en el artículo 8, fracción XV, en relación con lo dispuesto en el diverso 37, fracción II, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, no está considerada como grave, de acuerdo a lo que establece el antepenúltimo párrafo del artículo 13 del ordenamiento legal en mención; así como el diverso numeral 136, párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Además de que la falta administrativa respectiva no se encuentra comprendida en el catálogo de las faltas graves, debe precisarse que por sí misma tampoco resulta de gravedad, toda vez que se advierte que se trató de la presentación extemporánea por lo que debe estimarse que la referida falta administrativa implica un defecto en el cumplimiento de una obligación legal y, por ende, debe sancionarse con el fin de evitar prácticas de esta naturaleza.

II. Por lo que atañe al segundo punto, cabe resaltar que las circunstancias socioeconómicas de ***** , no es necesario precisarlas en virtud de que en el caso no se impondrán sanciones pecuniarias, ni tampoco son relevantes para pronunciarse sobre la gravedad de la falta cometida.

III. En lo atinente al tercer elemento, es menester reiterar que dicho servidor público tenía la categoría de secretario auxiliar del secretario particular, adscrito a la ponencia del señor Ministro José Vicente Aguinaco Alemán, respecto de sus antecedentes, de su expediente personal que se lleva en la actualmente Dirección General de Personal, se advierte que ingresó a laborar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el cargo de secretario auxiliar del secretario particular adscrito a la Ponencia del señor Ministro José Vicente Aguinaco Alemán, el veintinueve de junio de dos mil uno, con efectos a partir del primero de julio del mismo año y el ocho de marzo se expidió aviso de baja por cambio de adscripción.

En relación con los antecedentes de la infractora a los que se refiere la fracción III del artículo 14 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, es importante considerar, inclusive, cuál ha sido la conducta procesal observada por el servidor público durante el desarrollo de este

procedimiento. Al respecto, resulta aplicable la tesis cuyos rubro, texto y datos de identificación son los siguientes:

“CONDUCTA PROCESAL DE LAS PARTES.

La conducta procesal de las partes es un dato objetivo de convicción para el juzgador, que debe tomarse en cuenta, sin que por ello se violen las garantías individuales.”

(Sexta Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Apéndice 2000. Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Tesis: 111. Página: 88)

Del análisis de las constancias de autos se desprende que ***** atendió oportunamente al requerimiento que le formuló la Secretaría Ejecutiva de la Contraloría de este Alto Tribunal y rindió el informe correspondiente, haciendo valer las defensas que estimó pertinentes. Lo anterior es muestra del interés del servidor público en el desarrollo del procedimiento e, incluso, en la resolución que en éste pueda llegar a emitirse.

IV. Por lo que se refiere al cuarto aspecto, relativo a las condiciones exteriores y los medios de ejecución, deberá atenderse al bien jurídico salvaguardado así como a las repercusiones en la vida social que emanan de su lesión o amenaza y la importancia y necesidad de que permanezcan

incólumes y, por otra parte, a las circunstancias que rodearon la comisión de la falta así como a los medios empleados para ejecutarla.

De tal suerte, debe precisarse que el bien jurídico que tutela la obligación de presentar declaraciones de situación patrimonial, primordialmente se refiere a la honradez que debe caracterizar a todo servidor público, quien no debe mostrar signo alguno de enriquecimiento obtenido en el desempeño de sus funciones, que se aparte de los emolumentos devengados por la prestación de sus servicios, y su lesión o amenaza reviste gran trascendencia para la vida social, pues generan desconfianza en las instituciones de servicio público.

En el caso, ***** presentó extemporáneamente su declaración de conclusión de encargo, por lo que no se ciñó al marco legal aplicable; sin embargo, como ha quedado precisado con anterioridad, del contenido de la declaración respectiva no se advierte un enriquecimiento inexplicable por su parte; sin embargo, resulta relevante reprochar las conductas que implican el incumplimiento oportuno de la obligación consistente en presentar declaraciones patrimoniales.

Asimismo, en cuanto a las circunstancias que rodearon la comisión de la falta y los medios

empleados para ejecutarla, debe precisarse que de autos se advierte que el mencionado servidor público sí formuló su declaración aun cuando, sin tener para ello alguna justificación, no lo hizo de manera oportuna.

V. En lo concerniente al quinto punto, se pone de relieve que del expediente personal de ***** se advierte que no ha sido sancionada con motivo de alguna falta administrativa que haya cometido, de ahí que no se actualice el supuesto de reincidencia.

VI. Finalmente, por lo que hace al punto sexto de la disposición en comento, es preciso puntualizar que no existe en el caso constancia alguna de la que se desprenda que, como consecuencia de la presente falta, ***** hubiese obtenido algún beneficio, lucro u ocasionado daño o perjuicio económico.

De tal suerte, para la imposición de la sanción respectiva, habrá de tomarse en cuenta que la falta en que incurrió ***** no está catalogada como grave; que mencionó el porque presentó extemporáneamente su declaración de conclusión de encargo; que no hay constancia de que hubiera sido sancionada con motivo de la comisión de alguna infracción administrativa, ni hay constancia de que hubiera estado sujeto a un procedimiento de esta naturaleza; y que, con motivo de tal infracción

administrativa, no obtuvo beneficio o lucro, ni provocó daño o perjuicio a este Alto Tribunal.

En mérito de lo expuesto, en uso de las facultades que le confieren al Presidente de este Alto Tribunal los artículos 14, fracción XXI, y 133, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y tomando en consideración los elementos a que hace referencia el antes invocado artículo 14 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se llega a la conclusión de que ha lugar a proponer se sancione a ***** con un apercibimiento privado, la que habrá de ejecutarse por conducto de la Secretaría Ejecutiva de la Contraloría de este Alto Tribunal, previa cita al servidor público respectivo en la sede de aquélla.

Asimismo, deberá remitirse copia del presente fallo a la Dirección General de Personal, a efecto de que sea agregada al expediente personal de *****; así como a la Contraloría del Poder Judicial de la Federación, para que la integre en el registro de servidores públicos sancionados.

Por lo expuesto y fundado se resuelve:

PRIMERO. Conforme a lo expuesto en el considerando cuarto de la presente resolución,

***** incurrió en la falta administrativa materia de este procedimiento de responsabilidad administrativa.

SEGUNDO. Se sanciona a ***** con un apercibimiento privado que habrá de ejecutarse en los términos del último considerando de este fallo.

Devuélvase el expediente a la Secretaría Ejecutiva de la Contraloría de este Alto Tribunal, a efecto de que notifique personalmente esta determinación al servidor público sujeto al procedimiento y, en su oportunidad, lo archive como totalmente concluido.

Así lo resolvió el señor Ministro Mariano Azuela Güitrón, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.